

Márgenes de acción campesina y obras públicas: el caso de los caminos en pueblos de la sierra veracruzana*

Odile Hoffmann**

Desde la independencia (1821) y el siglo del liberalismo que pretendía "sacar al campo del oscurantismo", y más recientemente desde la Revolución de principios de siglo, el Estado Mexicano se reivindica como la contraparte protectora y privilegiada del mundo rural. En realidad, después de la Revolución y del periodo de reparto agrario que tiene su apogeo en 1936-1940 bajo la

presidencia de Lázaro Cárdenas, el Estado implementa decididamente una política de modernización industrial del país y abandona el mundo rural o más bien el sector campesino de éste. A partir de los treinta los precios de productos agrícolas se estancan, la producción baja en proporciones tales que el país debe importar, a principios de los años setenta, los cereales básicos que antes exportaba; el sub-empleo en el campo favorece una emigración rural desenfrenada y surgen movimientos campesinos de protesta en casi todos los estados, particularmente en Oaxaca y Guerrero.

Ante esta situación explosiva del campo, el presidente de entonces, Luis Echeverría (1970-1976), tomó ciertas medidas de revitalización de la reforma agraria, con nuevas dotaciones de tierras, y

* Este Artículo retoma parte de una Ponencia presentada en una Mesa Redonda organizada por el CNRS y el CECIED en París. Del 9 al 10 de abril de 1987, sobre "Necesidades colectivas y relaciones de poder en pueblos pequeños y ciudades de América Latina: El acceso a obras públicas".

** Investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Jalapa, Ver.

sobre todo, trató de implementar un programa de colectivización en los ejidos ya existentes. Fue en esa época que el Estado adquirió una mayor presencia en el ámbito rural, interviniendo directamente en la comercialización y financiamiento de la producción agrícola, así como en el impulso de programas de desarrollo rural.

De hecho, en las zonas de difícil acceso, o marginadas por su producción y población, y a pesar de la creación de organismos especializados, CONASUPO, COPLAMAR, las acciones gubernamentales fueron a menudo aisladas y discontinuas. Ver el significado de las siglas al final del artículo.

Sin embargo, con la crisis de los años setenta, el mundo rural aspira a cambios sustanciales y comienza a exigir ante el Estado el derecho a los servicios públicos.

Por mundo rural se entiende las comunidades y pueblos rurales, inscritos en una organización política-administrativa (municipio, estado) que las relacione con el Estado y los demás sectores y actores del país. Por "exigencia" se entiende las reivindicaciones y luego las estrategias desarrolladas para lograr tal o cual servicio.

De esos dos conceptos se deriva toda una serie de combinaciones posibles entre actores e intereses:

1. Entre toda o parte de una colectividad rural y los interlocutores competentes, que sean del Estado (las diferentes Secretarías a nivel Federal y Estatal) o extra-oficiales, como los partidos políticos o los poderes locales (caciques, iglesias,...).

2. Entre los mismos miembros de la comunidad, reunidos o en conflicto alrededor de un tema supuestamente colectivo: los servicios públicos.

En otros términos, las reivindicaciones para mejoras en equipos colectivos suponen por un lado, negociaciones con las instancias de decisión y por otro, luchas de intereses dentro de la comunidad y de la comunidad hacia afuera. Tanto unas como otras requieren de un manejo en las relaciones de poder en el medio rural, el cual hasta hoy era más bien reservado a la élite política y no a las comunidades rurales.

El presente artículo trata de demostrar cómo pequeñas poblaciones, en la sierra veracruzana, se organizan para obtener respuesta a una petición para ellos esencial: las comunicaciones.

¿Qué posturas suscitan tal petición? ¿Qué resistencias, qué intereses o grupos de interés intervienen, bajo qué formas? ¿De qué poder se vale la colectividad rural para exigir y obtener tal o cual servicio público? Las teorías y los estudios sobre la marginación, numerosos en México (ver por ejemplo Geografía de la Marginación, 1982), han difundido un esquema -tipo de sistema rural, donde las comunidades campesinas están totalmente desprovistas de autonomía y de poder de decisión, y supeditadas en todo al Estado y a las clases dominantes. Sin defender de ninguna manera la tesis inversa, se trata de reconocer la participación campesina y de subrayar el papel activo que juega la

población rural en la dinámica social regional.

Una corta revisión histórica de los caminos y vías de acceso precede tres análisis de casos que nos permiten llegar a consideraciones más generales en conclusión.

HISTORIA DE LOS CAMINOS EN UN MUNICIPIO SERRANO: XICO, VERACRUZ

En el centro de Veracruz, el municipio de Xico (actualmente con más de 18 mil habitantes repartidos sobre un área de 176 km²), se presenta como un pequeño embudo perpendicular al eje de la Sierra Madre Oriental. La parte baja, entre 700 y 1400 metros de altitud, zona cafetalera y de caña, alberga a la cabecera y a más del 60 por ciento de la población; más allá al oeste, comienza la vertiente donde se encuentran dispersos una veintena de pueblos, entre pastizales, parcelas de maíz, frijol y papas, bosques de pino, hasta los 3 mil metros. Desde siempre las relaciones privilegiadas de los pueblos con la cabecera han tenido una red de caminos por donde transitan tanto productos en ambos sentidos (madera, flores, leche y queso hacia abajo; productos manufacturados y alimenticios, azúcar, legumbres, hacia arriba), así como hombres en sus migraciones temporales o cotidianas de trabajo hacia las plantaciones de abajo.

En esta zona de montaña las partes altas no subsisten sino por las aportaciones de las bajas, las cuales viven y se desarrollan con la

mano de obra y las actividades complementarias de las partes altas. A pesar de la intensa y antigua circulación entre las dos zonas, la ruptura socio-económica permanece clara entre "los arribeños", descendientes de la población indígena original o nuevos ejidatarios venidos de fuera, todos campesinos pobres u obreros agrícolas, y la parte baja dominada por fuertes cafeticultores o ganaderos ligados a la esfera comercial y política regional (lo que no excluye evidentemente la presencia de minifundistas y campesinos sin tierra en la zona cafetalera).

La historia de las vías de comunicación aclara singularmente lo que es y ha podido ser la conformación de este espacio rural, ¿qué posturas se han desarrollado?, ¿a qué intereses respondía la creación o el abandono de una vía de comunicación?

En la parte baja, lugar de asentamientos azucareros y ganaderos precoces desde los siglos 16 y 17, los hacendados iniciaron rápidamente la construcción de caminos necesarios a la producción, su transformación y comercialización. Es además una zona de relieve relativamente suave favorable a las comunicaciones.

Al contrario, la parte alta quedó relacionada con los únicos caminos muleteros, medio de comunicación que retoma las antiguas redes de las comunidades indígenas.

Al terminar el siglo XIX, se construyen ferrocarriles, tanto en la parte alta, entonces explotada por sus recursos forestales, como en la parte baja, azucarera y recientemente cafetalera. Siguen siendo obras de empresarios privados, hacendados, más

negociantes o contratistas forestales, con el apoyo del gobierno porfirista en algunos casos.

Ya en el siglo XX, en los años cincuenta, empiezan a construirse carreteras pavimentadas y caminos de terracería que permiten sacar los productos en ambas partes, mientras desaparecen las vías férreas obsoletas. Sin embargo, estos nuevos caminos quedan íntimamente ligados a intereses comerciales precisos, las comunidades de la sierra siguiendo incommunicadas en su gran mayoría.

Hay que esperar el final de los setenta y los ochenta para asistir a una verdadera eclosión de los caminos de terracería en la parte alta e intermedia. Algunos son financiados directamente por el Gobierno del Estado en el marco de proyectos de desarrollo, pero la mayor parte resultan de peticiones, participaciones y acciones de las mismas comunidades campesinas.

¿Por qué estas peticiones y realizaciones sobre estos 10 últimos años? Dificilmente puede anteponerse el efecto de una eventual *integración al mercado regional y a la economía moderna*, siendo esta última efectiva desde hace más de medio siglo y quizás varios siglos a través del trabajo asalariado temporal y de la dependencia alimenticia de los altos en contraposición a los bajos (los minifundistas de los altos no aseguran más que excepcionalmente su autosuficiencia en maíz y frijol). Tampoco pueden invocarse una intervención reciente y masiva del Estado del gobierno de Veracruz, que no impulsó programas de comunicación en esta región, al contrario de otros estados de la República.¹

Un primer elemento de respuesta lo proporcionan los antecedentes históricos viendo cuáles son los actores implicados en las realizaciones. Hasta los años sesenta y setenta sólo los empresarios privados que disponían de capital habían construido y abandonado a su vez infraestructuras de acuerdo a sus intereses. No se trataba tanto de dominio, de control o de mejoras del espacio rural, sino de un simple interés comercial y de producción. La iniciativa de un camino competía a un individuo, a una familia o a un grupo familiar. El Gobierno, por su parte, no intervenía a este nivel, buscando aún asegurar el control de regiones

1 A nivel de todo el país, el Gobierno Mexicano lanzó una gran campaña de construcción de caminos rurales a principios de los setenta, con participación remunerada de las poblaciones. Se trataba, por una parte, de comunicar a más de 15 mil localidades marginadas, o sea cerca de 12 millones de habitantes, el 25 por ciento de la población total de entonces y, por otra parte de emplear la mano de obra local y disminuir así las tasas de desempleo rural. El programa inicial, en 1971, hablaba de caminos de mano de obra. El programa llenaba también una función estratégica e incluso militar importante, penetrando en zonas de fuerte movilización campesina donde la guerrilla de los setenta encontraba apoyo y refugio (Oaxaca, Guerrero, Huasteca hidalguense). Al contrario, los estados tranquilos donde domina una agricultura comercial empleando mucha mano de obra (Veracruz, Sinaloa, Sonora) prácticamente no se vieron beneficiados por este programa que habría podido perjudicar a la organización del trabajo asalariado en estas regiones (Ramírez Mendoza, 1981).

pobladas o más productivas (ver por ejemplo el formidable desarrollo en materia de caminos y el "desenclave" de la costa de Veracruz bajo el gobierno de Avila Camacho 1940-1946) y de cabeceras de municipios (en la región: Cosautlán en 1948, Ixhuacán en 1954).

Tanto en un caso como en el otro, las comunidades rurales no aparecían como actores ni siquiera como solicitantes: tenían sus propios medios de comunicación, sus propias redes, si no paralelas, al menos yuxtapuestas a las redes modernas de comunicación.

Los años setenta y ochenta ven entrar en escena, junto al Estado, a pequeñas colectividades rurales. Las dos partes buscan favorecer la integración regional de los pueblos hasta entonces aislados. El Estado quiere asegurar su presencia en las zonas más apartadas², y hacerlo al menor costo, es decir, con la participación del pueblo. Por su lado, las comunidades piden más medios de comunicación e invierten mucho en su realización.

En efecto la facilidad de comunicación prepara el acceso a otros servicios públicos o privados: tiendas de abarrotes, escuelas, centros de salud, etc. A pesar de los animados discursos sobre las áreas margi-

nadas y su desarrollo, los programas de asistencia, o más bien sus promotores, no llegan más que a los pueblos y zonas que son accesibles en carro.

Los campesinos están perfectamente conscientes de ello: si el camino es una necesidad urgente para la vida cotidiana de los habitantes, si el mejoramiento del transporte de los hombres y de los productos es una prioridad, el camino es también una puerta abierta al futuro, a una integración a la vida regional de la cual están, en parte, excluidos por ahora; esta integración parece sólo económica, pero lo es también política.

Bajo este último rubro hay que notar la lucidez de los campesinos que conocen bien el interés del Estado en favorecer la comunicación en el medio rural, y que ven en esta no solamente la posibilidad para ellos de un acceso de vida moderna, sino también, el acceso a ellos de la ciudad y los políticos. *El camino es el escalón para que suban los políticos*. Si el Estado y los políticos quieren controlar, que conozcan primero, y que ayuden después a resolver ciertos problemas; pero para eso el camino es la primera e indispensable condición y las comunidades están dispuestas a pagar el precio para obtener esa conexión con la vida moderna, no solamente práctica y económica sino además política y administrativa. A los objetivos iniciales (mejoramiento de las condiciones de desplazamiento) se añaden, a medida que se acumulan los obstáculos a vencer, otros objetivos menos claramente percibidos y expresados, a menudo negados y olvidados, en los cuales centramos nuestra atención: La

2 Para efectuar un control inmediato, como en las regiones boscosas prohibidas a la explotación forestal (Hoffmann, 1988), o para implantar las instituciones administrativas del Gobierno, reafirmar su presencia y darse los medios de intervención que supone su nueva presencia y darse los medios de intervención que supone su nueva política rural.

búsqueda de un reconocimiento y de una integración política de los altos, de la sierra, confrontada desde hace varios siglos al dominio de la zona baja.

En otras regiones del estado se han podido seguir los efectos políticos de la introducción de las vías de comunicación; en la Sierra de Zongolica, región de importante población indígena en el centro sur de Veracruz, la construcción de caminos transitables, en el principio, fortaleció a los caciques locales quienes fueron los primeros en aprovechar las facilidades de transporte. Algunos grupos nuevos, esencialmente de comerciantes y acaparadores de café y de madera pudieron, igualmente, imponerse a las comunidades indígenas que no tenían los medios materiales para crear y mantener nuevas redes de transporte o de comercio. Sin embargo, a más largo plazo, después de una década, las comunicaciones favorecieron los intercambios y la organización campesina, a través de los cuales se pudo en algunas partes, romper los monopolios y "vencer" a los caciques hasta entonces dominantes. Los mismos fenómenos de doble efecto en el tiempo -fortaleza, debilitamiento y destrucción de cacicazgos- se observaron en otras regiones de fuerte influencia indígena y aislada durante mucho tiempo, como la Huasteca (L. Ponce Com. Oral).

Tres ejemplos tomados del mismo municipio de Xico ponen en claro las prácticas y las estrategias desarrolladas por las comunidades, las alianzas buscadas o impuestas. Los intereses en juego, en resumen el lugar de las colectividades rurales en el conjunto social y regional.

TRES PUEBLOS Y SUS CAMINOS: HISTORIAS DE ALIANZAS

Antes que nada, ¿cuáles son los problemas encontrados por una comunidad o un pueblo para la realización de un camino cuando es esta la que toma la iniciativa?

1. Encontrar el financiamiento, algunas veces muy elevado. Es necesario hacer intervenir a las instituciones especializadas, sea directamente, lo que es raro, sea más frecuentemente a través de un intermediario, el municipio. Esta primera fase necesita sacudir el letargo de las autoridades administrativas, municipales o del Estado, es decir, imponerse como interlocutor válido y reconocido.
2. Ponerse de acuerdo en el seno de la comunidad sobre el objetivo y los medios de utilizar, las cuotas de cooperación financieras y la repartición de las faenas, las responsabilidades.
3. Resolver los obstáculos específicos en cada caso, y que son en general de dos tipos: problemas técnicos de trazado y puentes, y negociaciones con los propietarios cuyos terrenos son atravesados por el futuro camino.

Exponemos enseguida los casos, describiendo cada uno, antes de proponer una interpretación más general.

MICOTLA: EL CAMINO DEL RECONOCIMIENTO

Se trata de una comunidad reciente, cuyos habitantes están solicitando una dotación sobre terrenos ejidales que trabajan en arrendamiento desde hace unos veinte años. El conflicto entre ellos y los ejidatarios dura ya desde hace algunos años, estos últimos teniendo apoyos institucionales fuertes tanto a nivel municipal como estatal.

Estar comunicado a la cabecera municipal y a la región se vuelve indispensable para facilitar los contactos con las instancias intervinientes: la SRA, la SARH, el municipio, etc. Con la situación formal delicada que conocen, les es imposible pedir cualquier apoyo o participación oficial.

La comunidad negocia entonces con un ganadero local, terrateniente, cuyas tierras son atravesadas por el posible camino. La colectividad aseguró la mano de obra, alrededor de 150 días de trabajo, mientras el ganadero pagó la máquina (Bulldozer) y el material (camiones graveros), que representaba más de 300 mil pesos en 1984. El propietario, miembro de la burguesía de Xico, antiguamente coludido con las autoridades municipales y últimamente en contra de ellas, y desde siempre en contra de los ejidos, afirma así su autonomía frente al municipio y sobre todo su capacidad de intervención en el mundo campesino. Al decidir apoyar a los colonos de Micotla, logra de un solo golpe dos objetivos: imponerse, como socio o interlocutor con el municipio en el momento en que se lleven a cabo las negociaciones sobre el estatuto de Micotla, constituirse una *clientela* cam-

pesina, una especie de reserva de movilización de la cual podrá echar mano en el momento que le convenga. Es el esquema tipo del cacique local, que combina las ventajas materiales y económicas inmediatas (sus tierras al quedar comunicadas por el camino aumentan su valor y rentabilidad) y políticas para el futuro (cf. caciquismo y poder político, 1985, sobre todo el artículo de Luisa Pare sobre Caciquismo y faccionalismo). Por su parte, la comunidad consiguió su camino, que era el objetivo buscado y al mismo tiempo probó su capacidad de organización y de acción, lo que la pone en ventaja en el momento de las discusiones con las instituciones. El acuerdo con el cacique local se asume con conocimiento de causa, la experiencia de casi 20 años de lucha ha probado la necesidad de alianzas aún coyunturales con socios *a priori* sorprendentes (un terrateniente que sostiene a los *invasores de tierras*). La facilidad con la que un mismo grupo pide asistencia a los diversos partidos políticos, a menudo opuestos, según su eficacia, es otra evidencia del pragmatismo campesino en materia de alianzas; a Micotla cinco partidos o sindicatos (PST, CAM, CCI, PPS, PDM) en su momento fueron solicitados antes de obtener el apoyo del PRI. En todos los casos se trata ya sea de provocar y generar una nueva situación, haciendo intervenir a partidos políticos que no sea el PRI, ya sea de aprovechar y explotar las relaciones de poder establecidas de antemano por otras personas (el cacique). El grupo, *comité pro-obra*, se vuelve un verdadero foro de educación política donde los campesinos aprenden a conocer a las personas, los

sonas, los grupos de poder y los mecanismos de negociación y de presión.

MATLALAPA Y SU EFIMERO CAMINO

Pueblo fundado en los cuarenta alrededor de un ejido, a más de 2000 msnm, Matlalapa no tiene más recursos que la explotación forestal clandestina, el cultivo de maíz, de papa y el trabajo asalariado en la parte baja.

En los setenta, unos ejidatarios organizan faenas y cooperaciones para la construcción de un camino que supuestamente permitiría una mejor integración regional y una mejor distribución de servicio (tiendas, centro de salud...).

Una vez realizado y terminado el trazado, la organización del pueblo se desmoronó. Por falta de mantenimiento (el empedrado es indispensable en esas regiones empinadas de suelos ándicos, de fácil derrumbamiento) el camino se deterioró desde la primera estación de lluvia, impidiendo la entrada de cualquier vehículo. Parece que al interior de la comunidad el consenso en cuanto a la oportunidad de tal obra era débil. Por ser un ejido, es decir una estructura de poder ya organizada y jerarquizada, se facilitó la imposición por algunos de un trabajo colectivo, según ellos por el bien de la comunidad. Sin embargo, no duró más que el tiempo en que la máquina y su operador intervinieron, es decir, que una persona extraña presionaba cotidianamente a la comunidad y exigía su participación con las faenas. A su partida, ninguna otra fuerza exterior al pueblo im-

puso el trabajo y las cooperaciones exigidas. La ausencia de cualquier alianza con otros actores, principalmente las autoridades, se percibe claramente como una de las causas principales de este fracaso. *Si hubiera sido un camino del Gobierno habría durado.*

La alianza permite una repartición de los trabajos, pero sobre todo implica una participación formal de la comunidad, una responsabilidad colectiva, una organización efectiva. Estas no se pueden lograr sin un real consenso y una cohesión interna a la comunidad, los cuales resultan de un cierto equilibrio en las relaciones de fuerzas presentes.

TECUAUTIPAN: UN CONFLICTO QUE SE REPITE

La construcción del camino y de su puente empieza en los setenta, bajo el impulso del agente municipal, apoyado por la mayoría de los habitantes de la comunidad (alrededor de 300 personas) y por la Presidencia Municipal de Xico.

A pesar de esta unanimidad, no logran la participación de los servicios oficiales que argumentan de dificultades técnicas y del costo excesivo para negarse.

Empieza entonces la obra con las únicas contribuciones y faenas de los vecinos. Sin embargo, la participación del municipio se vuelve decisiva cuando aparecen conflictos con los propietarios cuyas tierras atraviesa el camino nuevo. Estos últimos depositan numerosas quejas en el tribunal que sólo gracias al apoyo del

Presidente Municipal y sus intervenciones frecuentes logran neutralizarse.

La construcción del puente provoca problemas técnicos que los servicios *competentes*, nuevamente solicitados, no pueden o no quieren resolver. De nuevo la intervención del Presidente Municipal es necesaria para *contratar* a un ingeniero que aceptara el papel de asesor, gratuitamente, y que de hecho será el maestro de obra de este trabajo.

Nuevas quejas y acusaciones de los propietarios de tierras (por destrucción de pastos por el paso de los animales y de los hombres), efectuadas ya no en Xico donde el Presidente Municipal podía todavía intervenir, sino directamente en el tribunal de la ciudad vecina, provocan el envío de la policía a los lugares mismos del trabajo, el arresto y el encarcelamiento de los responsables durante una semana. Pudieron salir bajo fianza reunida entre los miembros del pueblo y las comunidades vecinas.

Es entonces cuando todas estas dificultades coinciden con un cambio de Presidencia Municipal: el nuevo Presidente no proporciona ningún sostén ni financiero, ni administrativo, ni político. Toda la obra se interrumpe durante todo el mandato de este Presidente (tres años). Se retoma hacia 1984 con otro que tropieza con los ganaderos que no están de acuerdo entre ellos a propósito del futuro camino. Todos se estiman perjudicados por él y bloquean, cada uno a su vez, el acceso a seis pueblos de los altos, o sea a más o menos 1500 habitantes. Sólo el Presidente, al convocar a todas las partes, logra imponer una de las alternativas, la de los futuros usuarios, los habitantes de

Tecuatipan. Mientras tanto una nueva y última tentativa se había llevado a cabo con los servicios especializados, aprovechando el sostén de que disponía el pueblo gracias a un pequeño programa de desarrollo impulsado a Tecuatipan por el INIREB.

Desanimados, pero sobre todo disgustados de los medios oficiales, de la incompetencia y la burocracia de esos servicios, de las enormes pérdidas de tiempo y de dinero gastados en los inútiles ir y venir a la ciudad, las falsas citas, el desprecio total en que los tienen los *Ingenieros*, los campesinos deciden continuar financiando ellos mismos el trabajo, y contratan a un maquinista privado, igual que en Matlalapa.

Los propietarios ganaderos participaron con cooperaciones ridículas (de \$3000 a \$24000.00) y el municipio desembolsó el dinero prometido (\$250 mil) con tres meses de retraso, obligando a los campesinos a endeudarse con un ganadero de la región, a tasas usurarias de 16 por ciento mensual (más o menos el doble de la inflación, precios 1986).

Actualmente, ocho meses después de la partida de la máquina, el camino continúa cerrado a la circulación pesada hasta que sean empedradas las partes delicadas: el ejemplo de Matlalapa está en la memoria de todos, y el siniestro destino de su camino jamás utilizado. Y de nuevo la última fase está a cargo de los habitantes, aún cuando el municipio dé algunos miles de pesos y los ganaderos prometen su participación.

Diez años de esfuerzos por el camino. Diez años de contribuciones diversas, interrumpidas de vez en cuando, de transacciones y humillaciones con las autoridades

que denegan a las comunidades el poder de decisión y organización de su propio espacio de vida. Diez años que forjaron en los campesinos una nueva imagen de su poder de negociación.

CONCLUSION

Un solo servicio -las vías de comunicación- responde a intereses específicos en cada caso.

El ejemplo de Micoctla es la ilustración de un fenómeno muy amplio, según el cual "el acceso a servicios colectivos, y la participación (de la población), tanto en México como en Brasil, están presentados hoy en día como una dimensión-clave del acceso de la "ciudadaneidad" (*citoyenneté*) plena y entera" (H. Rivière d'Arc, 1987, p. 9). Los campesinos luchan para su reconocimiento en la sociedad global, aquí con el pretexto de un conflicto agrario actual.

En Tecuautipan, se puede preguntar si el camino provocó los conflictos, o si al revés no fueron los intereses contrarios entre ganaderos y campesinos que provocaron la lucha para el camino, cristalizando así las posiciones divergentes de ambas partes. En este caso encontraríamos la misma situación que en Guerrero, en donde "la movilización de mano de obra gratuita ("las faenas" en Veracruz) acompaña obligatoriamente cualquier conflicto entre campesinos: las luchas regionales se vuelven el verdadero motor de la realización de las obras de servicio" (D. Denouve, 1987, pp. 14). Según el mismo proceso aunque de manera inversa,

en Matlalapa, una oposición interna a la comunidad, un conflicto entre campesinos fue a raíz del fracaso.

Más allá del objetivo formalmente reclamado, de las necesidades, la lucha por los servicios se inscribe dentro de una problemática rural donde las cuestiones de poder local y de conflicto de intereses revisten mayor relevancia.

En la búsqueda de un mismo objetivo las tres comunidades estudiadas desarrollaron estrategias diferentes en función de sus características propias y de sus capacidades organizativas. De manera más general, a través de las luchas por el acceso a tal o cual servicio, las colectividades aprenden a solicitar y a usar en su momento las diversas estructuras de poder, imbricadas las unas a las otras, que rigen de cerca o de lejos del mundo rural: las estructuras administrativas (el municipio y las agencias municipales), las estructuras clásicas oficiales (las Secretarías y sus servicios), las estructuras políticas tradicionales (el PRI, los caciques locales) y desde hace poco las estructuras políticas modernas (los diversos partidos de oposición oficialmente registrados desde 1979 y que buscan instalarse en el medio rural, ofreciendo su apoyo a las comunidades o pueblos que tienen problemas de orden socio-político, esencialmente agrario). A través de los diversos casos estudiados, vemos como las comunidades pueden jugar con las cuatro instancias y no son tan sumisas, pasivas e impotentes como a menudo nos las presentan.

El municipio pretende ser el maestro de obra de las inversiones públicas en su te-

ritorio cuando no es más que el intermediario, no teniendo ningún medio financiero apropiado ni voluntad política, salvo excepción, para exigirle al Gobierno o para enfrentarse usando diversas presiones. El municipio es sólo uno de los eslabones del sistema cuando bien podría ser la pieza maestra como lo prueban las recientes movilizaciones populares, las tomas de ayuntamiento y las experiencias de los municipios populares a través de todo el país (López Monjardín, 1986). Por su parte el Gobierno, con sus representantes, se erige como el benefactor de las zonas marginadas, cuando la realidad muestra la parte aplastante tomada por las comunidades en la realización de las obras públicas.

Pasada ya la época en que los empresarios privados disponían del espacio para su propio interés, las comunidades buscan obtener un cierto grado de control en el manejo de su espacio, control que depende, por una parte de una mayor capacidad financiera y por la otra de una mayor capacidad de organización, de un mejor conocimiento de las redes de relaciones y de su mejor utilización posible. Sin hablar todavía de poder alternativo, mucho menos de grupo de presión, las comunidades rurales tienen una posición bastante aceptable frente a las diversas instancias; sobre todo que la estructura política-administrativa nacional, constituida como un monolito alrededor del PRI, comienza a agrietarse y a dejar más margen de acción y espacios de expresión a entidades hasta entonces reducidas al silencio. El municipio, que tiene un poder de lo más reducido, podría beneficiarse de esta

evolución si el Estado permite dejarle una parte más grande de recursos y de competencias. Podría llenar el papel de pilar de la democracia que todas las constituciones le confieren desde la independencia sin haberle dado jamás los medios.

SIGLAS

CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares

COPLAMAR Comisión para la Planeación y Desarrollo de las Areas Marginadas

SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

SRA Secretaría de Reforma Agraria

PST Partido Socialista de los Trabajadores

CAM Confederación Agrarista Mexicana

CCI Confederación Campesina Independiente

PPS Partido Popular Socialista

PDM Partido Demócrata Mexicano

PRI Partido Revolucionario Institucional

INIREB Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos

BIBLIOGRAFIA

- 1985, Caciquismo y poder político en el México rural" 7a. Edición, Siglo XXI, México, p. 203.
- CHAMOUX, MN, 1981, Indiens de la Sierra: la communauté paysanne au Mexique. L'Harmattan, p. 397.
- DEHOUE, D., 1987, "Le Travail gratuit au Mexique: les communautés tlapanèques et l'équipement", p. 14, ponencia de la mesa redonda "Besoins collectifs et rapports de pauvoir dans les villages et petites villes d'Amérique Latine: l'accès aux équipements et services publics", CECIED-CNRS, París, p. 9-10, Avril.
- GARCIA MORALES, S, 1984, El ferrocarril de tracción animal Jalapa-Coatepec, 1875-1880; La palabra y el hombre, Universidad Veracruzana, núm. 52; pp. 25-34.
- COPLAMAR, 1982, Geografía de la marginación, Necesidades esenciales en México, situación actual y perspectivas al año 2000, núm. 5; Siglo XXI, p. 305.
- GUERRA, F., 1985, Le Mexique: de l'ancien régime a la révolution. L'Harmattan, Publications de la Sorbonne; 2 tomes: pp. 440-441.
- HOFFMANN, O., 1987, "Des chemins pour quoi et comment: Revendications et marges d'action paysanne dans les villages de la Sierra Veracruzaine. (Mexique). p. 21, ponencia de la mesa redonda "Besoins collectifs et rapports de pauvoir dans les villages et petites villes d'Amérique Latine: l'accès aux équipements et services publics" CECIED-CNRS, París, pp. 9-10, avril.
- 1988, De los hacendados a los forestales: tenencia de la tierra y explotación del bosque en la sierra Veracruzana desde un siglo. INIREB-ORSTOM, Xalapa; p. 30, multigr.
- LOPEZ MONJARDIN, A., 1986, La lucha por los ayuntamientos, una utopía viable. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Siglo XXI, p. 157.
- PRECIADO, J., 1986 El COPLADE en Veracruz. IHEAL, p. 20 multigr.
- RAMIREZ MENDOZA, MG., 1981, Los caminos de mano de obra en México. Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM, México; núm. 11; pp. 227-262.
- REVEL-MOUROZ, J., 1971, Mexique; aménagement et colonisation du tropique humide. Travaux, IHEAL, París, núm. 27, p. 269.
- RIVIERE d'ARC, H., 1987, "Les relations entre les autorités locales et les populations", p. 9, ponencia de la mesa redonda "Besoins collectifs et rapports de pauvoir dans les villages et petites villes d'Amérique Latine: l'accès aux équipements et services publics", CECIED-CNRS, París, pp. 9-10, avril.

Mesa redonda: La investigación en la docencia de la antropología*

PRESENTACION

La Escuela Nacional de Antropología, el Departamento de Antropología de la División de Ciencias Sociales de la UAM/Iztapalapa y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales consideran necesario iniciar una discusión sobre la docencia de la antropología en México con el fin de analizar los múltiples problemas a los que se enfrentó la formación de profesionales en esta disciplina.

Dado que la antropología mexicana se ha caracterizado por haber mantenido una relación permanente entre la docencia y la investigación de campo, aún a nivel de licenciatura, se eligió el tema "La investigación en la docencia de la antropología" para analizar las implicaciones, que ha tenido tanto desde la perspectiva de la construcción del conocimiento, como desde el punto de vista de la organización de la docencia.

Participaron como organizadores Manuel Gándara y Juan Gamiño por la ENAH, Raúl Nieto y Patricia de Leonardo por el Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa y Silvia Gómez Tagle por el CEAS.

* La mesa redonda tuvo lugar en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, por lo que agradecemos el generoso apoyo que nos brindó esta institución.

Nueva Antropología, Vol. X, No. 35, México 1989

NUEVA ANTROPOLOGIA

Dirección: Silvia Gómez Tagle

Consejo de Redacción: José del Val, Néstor García Canclini, Francisco Javier Guerrero, Eduardo Menéndez, Raúl Nieto, Mechthild Rutsch.

Consejo Editorial: Jorge Alonso, Lourdes Arizpe, Luis Barjau, Luis Berruecos, Héctor Díaz-Polanco, Juan Gamiño, Adrián García Valadés, Ludka de Gortari, Esteban Krotz, Brix B. Lameiras, José Lameiras, Gilberto López y Rivas, Eduardo Matos, Andrés Medina, Juan Manuel Pérez Zeballos, Juan Luis Sariago, Erwin Stephan Otto, Héctor Tejera, Roberto Varela.

Coordinación de este número: Silvia Gómez Tagle

Instituciones que colaboran en la edición de
NUEVA ANTROPOLOGIA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Departamento de Antropología de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

Precio por ejemplar \$ 8.000.00

Suscripción por 3 números en México \$ 24,000.00
(Precio sujeto a cambios trimestrales)
En el extranjero correo aéreo, USD 25.00

Nueva Antropología, A. C.
Av. Popocatepetl 510
México 03330, D. F.

Tel. 688-96-58

Distribuidor: DICE, S.A. de C.V. Av. Popocatepetl 510
México 03330, D. F. Tel. 688-99-65

Producción: **GV** editores, s. a. de c. v.

Tiro: 3,000 ejemplares



Impreso y hecho en México

No se considerarán colaboraciones que excedan de 30 cuartillas a máquina a doble espacio. Los artículos firmados, son responsabilidad exclusiva de los autores. Los originales no serán devueltos en ningún caso.

O.R.S.T.O.M. Fonds Documentaire

Nº : 27912 ex 1

Cote : B VIII P5

25-05-90



NUEVA ANTROPOLOGIA

Vol. X, NUM. 35

MEXICO, JUNIO 1989

Sumario

Editorial, 5

La presencia indígena en los procesos sociopolíticos contemporáneos de Centroamérica, *Marie Chantal-Barré*, 9

La cultura política después del 6 de julio, *José Antonio Crespo*, 29

Identidad y lucha política en los Altos de Chiapas, *Héctor Tejera*, 39

Márgenes de acción campesina y obras públicas: el caso de los caminos en pueblos de la sierra veracruzana, *Odile Hoffmann*, 53

MESA REDONDA

La investigación en la docencia de la antropología, presentación, 65

Algunos problemas de la enseñanza de la investigación antropológica, *Esteban Krotz*, 67